

Poder Judicial de la Nación

Buenos Aires, 25 de febrero de 2026.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver la causa **CPE 684/2024/TO1**, caratulada: “**BECHECH, MIGUEL ÁNGEL S/INFRACCIÓN LEY 24.769**”, del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico nro. 1, seguida contra: **Miguel Ángel BECHECH** (*titular del DNI N° 11.076.037, nacido el 24 de agosto de 1953 en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de estado civil casado, de ocupación asesor financiero, con estudios universitarios parciales en la carrera de administración de empresas, hijo de Miguel BECHECH y de Emilia HADAD, con domicilio en Virrey Loreto 1733, piso 7°, CABA*).

RESULTA:

I. Que, en la presente causa, se imputó a Miguel Ángel BECHECH la presunta evasión del pago del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2005, por la suma de \$3.178.145,34; suceso que fue encuadrado en la figura de evasión agravada contenida en el art. 2 -inc. “b”- de la ley 24.769 (B.O. 15/1/1997), en función del art. 1 de ese cuerpo normativo (cfr. requerimientos de la Fiscalía de instrucción y de la parte querellante -ARCA-).

En ese sentido, cabe recordar que -por el art. 1° de la ley 24.769- se sancionaba “... *con prisión de dos a seis años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, siempre que el monto evadido excediere la suma de cien mil pesos (\$ 100.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año*” (el resaltado es de la presente).

A su vez, por el inciso “b” del art. 2 de aquel Régimen Penal Tributario se agravaba la figura de evasión simple contenida en el art. 1° “... *Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad*



Poder Judicial de la Nación

del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superar la suma de doscientos mil pesos (\$ 200.000)''.

II. Que, el día 02/02/2026, encontrándose en pleno trámite el expediente, la defensa de Miguel Ángel BECHECH solicitó que se disponga el sobreseimiento de su asistido en la presente causa, en la medida que -según indicó- el nuevo Régimen Penal Tributario instaurado por la ley 27.799 resulta más benigno para su asistido, puesto que -según indicó- en la redacción actual la conducta imputada no constituye delito (arts. 2 del Código Penal). Ello, bajo los fundamentos expuestos en aquella presentación, a la que se remite para evitar reiteraciones innecesarias.

III. Que, al contestar el traslado conferido, el representante de la querella (ARCA), consideró que *"... la reciente reforma legislativa constituye un evento nuevo que fulmina el progreso de la acción penal en aplicación del principio de la ley más benigna, pues el perjuicio irrogado no supera el umbral de punibilidad establecido mediante la ley 27799, lo cual solicitamos que así se resuelva"* (ver escrito de fecha 05/02/2026, incorporado por sistema).

IV. Que, además, se corrió traslado a la Fiscalía; cuyo representante -Dr. Diego Velasco- indicó que, desde su óptica, las modificaciones establecidas para los montos mínimos fijados como condiciones objetivas de punibilidad en el régimen penal tributario, no obedecen a un cambio en la valoración social de las conductas, sino que responden, únicamente, a la necesidad de actualizar las sumas con motivo de los procesos inflacionarios que atraviesa constantemente el país.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la nueva ley penal tributaria mantiene la valoración, la estructura delictual de la conducta y su gravedad, no existe -a su criterio- un cambio de la valoración legislativa, sino una adaptación a las coyunturas de la economía actual, por lo que su criterio es que no corresponde la aplicación retroactiva de las leyes que actualicen las



Poder Judicial de la Nación

condiciones objetivas de punibilidad de los delitos previstos por el régimen penal tributario.

Sin embargo, el distinguido Fiscal -al analizar el caso concreto- consideró que “... los hechos investigados no revisten características de criminalidad organizada ni compleja, es decir no se verifica una organización criminal que haya adoptado sistemáticamente prácticas ilícitas como modalidad de actuación, tampoco involucran, ni han involucrado, sumas dinerarias de significativa entidad, ni configuran maniobras delictivas prolongadas en el tiempo. A ello se suma el prolongado lapso de tramitación del proceso, iniciado en el año 2014 y que acumula a la fecha doce (12) años de duración por un hecho cometido hace 20 años (2005), plazo que podría extenderse considerablemente en caso de articularse las vías recursivas estimuladas por las divergencias existentes entre la doctrina sentada por la CSJN en el precedente ‘Vidal’ y la postura adoptada por esta representación del Ministerio Público Fiscal. En tal contexto, la extensión temporal ya verificada, así como la razonable prognosis de ulterior dilación derivada de tales vicisitudes procesales, configuran un elemento adicional que corresponde ponderar en favor de los imputados”.

En tales condiciones, indicó el representante de la Fiscalía que “... ponderadas las particularidades del caso, en mi carácter de titular de la acción penal pública, entiendo que razones de política criminal y de economía procesal, sumadas al escaso grado de afectación del bien jurídico tutelado, y a la opinión en contrario a la postura de esta parte asumida por el Máximo Tribunal en el precedente “Vidal”, conducen a no oponerme a una solución desincriminatoria... Máxime cuando la propia víctima -ARCA- ha propiciado, mediante instrucción general, el desistimiento de la acción penal en supuestos análogos al presente (Véase Resolución IG-2026-I- E-ARCA-SDGASJ)”.



Poder Judicial de la Nación

Por todo lo expuesto, y sin perjuicio de dejar a salvo el criterio de esa Fiscalía en cuanto a la improcedencia de la aplicación retroactiva de la ley 27.799, indicó el Sr. Fiscal que no se oponía a una solución desincriminatoria en autos.

Asimismo, manifestó que resulta conveniente remitir testimonios a la ARCA con el objeto de que dicho organismo evalúe la existencia de posibles infracciones administrativas; dejando a salvo que el sobreseimiento del imputado de ningún modo acarrea la extinción de la deuda tributaria, que mantiene con la ARCA y que se encuentra habilitado para regularizar su situación ante el organismo recaudador.

Todo ello, de acuerdo a los demás argumentos expuestos en su dictamen, al que cabe corresponde remitirse por razones de brevedad y que debe considerarse como parte integrante de la presente.

Y CONSIDERANDO:

V. Debe recordarse que la ley 27.799 (B.O. del 02/01/2026) introdujo modificaciones al Régimen Penal Tributario instaurado por la ley 27.430 (art. 279 y siguientes), que había sustituido la ley 24.769.

En particular, la figura de evasión simple (prevista en el art. 1 del Régimen Penal Tributario) quedó redactada de la siguiente manera: “*Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de pesos cien millones (\$100.000.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se, tratase de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un (1) año (el resaltado es del presente).*”

USO OFICIAL



Poder Judicial de la Nación

VI. Ahora bien, de acuerdo a los siguientes argumentos el suscripto interpreta que la ley nueva introdujo una modificación que resulta ser más benigna que la figura vigente al momento de la presunta comisión del hecho, por lo que corresponde su aplicación al caso, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 2 del Código Penal.

Debe recordarse, que ese artículo establece que: *“Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna...”*.

Incluso, no puede desconocerse que a partir de la reforma de 1994 adquirió rango constitucional la obligatoriedad de aplicar en forma retroactiva la ley penal cuando resulta más benigna (art. 75 -inc. 22- de la Carta Magna, que incorporó los Pactos Internacionales a la Constitución Nacional).

En particular, el Pacto de San José de Costa Rica -en su art. 9- determina que: *“Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable... Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello”*. Por su parte, el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que: *“... Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello”*.

Pero se ha sostenido, y el suscripto comparte, que: *“La ley penal más benigna no es solo la que desincrimina o la que establece pena menor, pues (a) puede tratarse de la creación de una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, de un impedimento a la operatividad de la penalidad, etc.; (b) puede provenir también de otras circunstancias, como el menor tiempo de prescripción, una distinta clase de pena, una nueva modalidad ejecutiva de la pena, el cumplimiento parcial de la misma, las previsiones sobre condena condicional, probation, libertad condicional...”* (Eugenio R. Zaffaroni,



Poder Judicial de la Nación

Alejandro Alagia y Alejandro Slokar: “Derecho Penal. Parte General”, Ediar, año 2000, pág. 115)¹.

A criterio del suscripto, resulta acertada la posición del Dr. Javier A. De Luca, cuando propone que -para verificar la existencia de una ley penal más benigna- basta con comprobar si hoy, por esa misma conducta, ese sujeto no sería punible². Es que resulta inadmisibles imponer una pena de prisión a quien cometió un hecho que ya no constituye delito.

De este modo, pierde importancia práctica la discusión dogmática si la modificación de los montos contemplados por las figuras delictivas del Régimen Penal Tributario son un cambio en el tipo objetivo o en una condición objetiva de punibilidad, ya que el art. 2 del Código Penal nada dice al respecto, sino que prevé la aplicación de la ley más benigna de un modo genérico, que abarca las reformas de los elementos del tipo, la cuantía de la pena y las condiciones objetivas de punibilidad.

En este sentido, debe recordarse que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 330:4544³ -al hacer suyo el dictamen emitido por el Procurador General de la Nación- sostuvo: “... *tal como reclaman los recurrentes, la Ley 26.063 (sancionada el 9/11/05 y publicada en el Boletín Oficial del 9 de diciembre siguiente) ha introducido una importante modificación en la descripción típica del art. 9 de la Ley 24.769, al aumentar... el límite a partir del cual es punible la apropiación indebida de recursos de la*

¹ En la misma dirección, ya se expidió este Tribunal Oral en la causa CPE 990000411/2006/TO1, caratulada “LASTORIA, Lilian Alicia y otros S/ Ley 23.771 y asociación ilícita”, de fecha 11/3/2019.

² “La garantía constitucional de retroactividad de ley penal más benigna y su violación en las leyes penales económicas en blanco con el pretexto de subsistencia de la lesión al bien jurídico protegido”, ponencia efectuada en el Congreso Internacional de Derecho Penal, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la U.B.A., entre los días 11 y 14 de agosto de 1997.

³ En la conocida causa “Palero, Jorge Carlos s/recurso de casación”, de fecha 23/10/07, ante una situación similar, dispuso la aplicación retroactiva de la ley 26.063, que incrementó el monto exigido por el art. 9 de la ley 24.769.



Poder Judicial de la Nación

seguridad social. De ello se deriva que resulta imperativo examinar si las conductas juzgadas pueden seguir siendo consideradas merecedoras de reproche penal. Pienso que ello es así pues ... los efectos de la benignidad normativa en materia penal ‘se operan de pleno derecho’, es decir, aun sin petición de parte (fallos 277:347; 281:297 y 321:3160). Por otro lado, el análisis acerca de la aplicación de ese principio legal, que ha sido también establecido en tratados de orden internacional con jerarquía constitucional, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15)”. En consecuencia, “... resulta aplicable al caso en forma retroactiva esta ley que ha resultado más benigna para el recurrente de acuerdo a lo normado por el art. 2 del Código Penal, en tanto que la modificación introducida importó la desincriminación de aquellas retenciones mensuales menores a dicha cifra, entre las que se incluyen las que conformaron el marco fáctico original de la pena impuesta al apelante que, de ser mantenida, importaría vulnerar aquel principio receptado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional a las que se ha hecho mención (Fallos 321:3160; 324:1878 y 2806 y 327:2280)”.

Ese criterio, que ya venía siendo aplicado por el suscripto⁴, ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Nro. CPE 601/2016/CS1, caratulada “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros sobre infracción ley 24.769”, resuelta el 28/10/2021.

VII. Sentado ello, se advierte claramente -en el caso concreto- que la conducta que se le atribuye a Miguel Ángel BECHECH no supera -siquiera- el nuevo monto introducido por la ley 27.799 para punir la evasión simple (que se estableció en la suma de \$ 100.000.000); por lo que esa norma debe aplicarse al presente caso -en forma retroactiva- por ser a todas luces más benigna, puesto

⁴ Entre muchas otras, en la causa CPE 1040/2010/TO1/6, caratulada “OLIVETO, Osvaldo



Poder Judicial de la Nación

que deja fuera de su alcance el hecho que se le atribuye a la persona imputada en autos.

En tales condiciones, habiéndose verificado respecto del imputado la existencia de una de las causales previstas en el ordenamiento adjetivo para el dictado de un auto de sobreseimiento (confr. arts. 336, inc. 3º, y 361 del C.P.P.N.), se impone la adopción de un pronunciamiento que cierre en forma definitiva el proceso a su respecto, sin necesidad de realizar el respectivo juicio oral.

VIII. Sin perjuicio de ello, toda vez que esa misma conducta podría configurar una posible infracción tributaria, conforme surge de la ley N° 11.683, cuyo entendimiento escapa a la jurisdicción del Tribunal, corresponde extraer testimonios de la presente y remitirlos a la A.R.C.A., a sus efectos.

Al respecto, importa indicar que la extracción de testimonios por esas conductas de ningún modo puede considerarse que viola la garantía constitucional del “*ne bis in idem*” (art. 18 de la Constitución Nacional).

En ese orden de ideas se expidió el suscripto en la sentencia dictada en la causa CPE 1195/2016/TO1⁵, al interpretar que si bien existe identidad de “objeto” y “sujeto” con la investigación desarrollada por el presunto delito (de contrabando en aquel caso, por el que se dispuso el sobreseimiento de la imputada por no configurar “delito” aduanero a la luz de la normativa posterior más benigna, aplicada retroactivamente), lo cierto es que -en el presente- no se encuentra verificada la identidad de “causa”, en la medida que no se agotó el examen de la pretensión punitiva, toda vez que -por expresa disposición de la ley 11.683- la investigación de las infracciones se encuentra a cargo de un juez administrativo.

⁵ De fecha 26/2/2019, con cita de la postura de la Dra. Liliana E. Catucci (causa CPE 1048/2012/CFC1 de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, caratulada “Eshwin, M. M.”, Reg. 1580/15, de fecha 16/9/2015) y la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, en la causa “Mensur” (Reg. 437/2016, del 31/08/2016), en la que confirmó una



Poder Judicial de la Nación

Por las razones expuestas, es que se;

RESUELVE:

I. SOBRESEER a **Miguel Ángel BECHECH** (de las demás condiciones mencionadas al inicio) en la presente causa, por aplicación del principio de ley penal más benigna, en orden a la presunta evasión tributaria del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2005, por el cual fue requerida su elevación a juicio (arts. 336, inc. 3°, y 361 del C.P.P.N. y art. 2 del C.P.)

II. DECLARAR que la realización del presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado la persona imputada (art. 336 “*in fine*” del Código Procesal Penal de la Nación).

III. EXTRAER TESTIMONIOS de las partes pertinentes de la presente y remitirlos a la A.R.C.A. a fin de que investigue si el hecho configura infracción tributaria, en los términos que fueran señalados por la consideración VIII.

IV. SIN COSTAS (art. 530 y concordantes del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y, firme que sea, comuníquese y cúmplase.

IGNACIO CARLOS FORNARI
JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

FRANCISCO AGUSTÍN LARRABURE
SECRETARIO DE JUZGADO

